



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado

Proceso: Ejecutivo
Demandante: LINA MARCELA HERNÁNDEZ BETANCOURT
Demandado: GERMÁN SALCEDO OSPINA.
Radicado: 05001310301220190045401
Decisión: Confirma sentencia

Sentencia Nro. 034

TRIBUNAL SUPERIOR
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, once de noviembre de dos mil veintiuno

Se procede a decidir por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia del 15 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín dentro del proceso Ejecutivo instaurado por LINA MARCELA HERNÁNDEZ BETANCOURT en contra de GERMÁN SALCEDO OSPINA.

I. ANTECEDENTES

1. Pretende la parte demandante que se libere mandamiento de pago a su favor y en contra de GERMÁN SALCEDO OSPINA por la suma de \$405.000.000 por concepto de capital contenido en una letra; más los intereses moratorios que se generaron durante el proceso y la condena en costas.

2. Como sustrato de sus pedimentos, adujo los planteamientos que el Despacho así compendia:

a) El 9 de octubre de 2018 el señor GERMÁN SALCEDO OSANA giró una letra de cambio por \$405.000.000 más los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, donde el girado era el señor JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO, sin estipularse beneficiario, por lo que se debe entender como un título al portador. El espacio para diligenciar la fecha de vencimiento se dejó en blanco, por lo que se entiende que será a la vista. Por lo anterior se tiene un año contado a partir de la fecha de creación del título para su presentación.

b) La letra de cambio nunca fue aceptada por el señor JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO, lo que genera que el principal obligado sea el girador; es decir, el señor GERMÁN SALCEDO OSPINA. Hasta el momento de la presentación de la demanda, la parte demandada no ha realizado ningún pago, ni de forma parcial o total. El título valor allegado contiene una obligación clara, expresa, exigible y proveniente del deudor.

3. **TRÁMITE.** Mediante auto del 13 de septiembre de 2019, el Juzgado Doce negó el mandamiento de pago, ante lo cual se interpusieron recursos de reposición y apelación. En el primero, se mantuvo la decisión y el segundo fue decidido por esta Sala, que en providencia del 6 de noviembre de 2019 revoca el auto. En cumplimiento a la decisión, mediante auto del 11 de diciembre de 2019 el A quo libra mandamiento de pago a favor de LINA MARCELA HERNÁNDEZ BETANCOURT en contra de GERMÁN SALCEDO OSPINA por la suma de \$405.000.000 como capital, más los intereses de mora a la tasa certificada por la Superfinanciera desde la presentación de la demanda, hasta el pago. La parte demandada interpuso reposición al auto mediante la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, el cual fue rechazado por extemporáneo. Dio respuesta a la demanda, formulando excepciones contra la acción cambiaria conforme al artículo 784 del CCIO numerales 4,10,11,12 y 13, esto es: **Numeral**

4º. "Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente". **Numeral 10.** "falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción". **Numeral 11.** "Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe" e ilegitimidad en la causa. **Numeral 12.** "Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. **Numeral 13.** "Las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor." Y en esta incluye la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago total. Solicita que en el evento de encontrar probada cualquiera otra la declare, especialmente los relativos a la inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la parte activa, carencia de derecho para pedir, cobro de lo no debido, fraude procesal y pago ya sea total o parcial.

II. LA SENTENCIA APELADA

4. Mediante providencia del 15 de junio de 2021 el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, manifestó que *letra de cambio allegada es un título formalmente apto, que, aunque inicialmente se había negado el mandamiento de pago, el tribunal consideró que sí cumplía las exigencias de ley. En principio la demandante cumple la carga de acreditar el acto jurídico fuente de la obligación que se demanda. Y a la demandada le correspondía acreditar su extinción con las excepciones. Indicó que las causales invocadas con fundamento en los numerales 4 y 10 del artículo 784 no prosperan no solo por el pronunciamiento del superior, sino porque en términos del artículo 430 CGP los requisitos del título solo pueden ser solicitados como reposición y en este caso fueron alegados como excepción previa, ello impide que la sentencia los vuelva a considerar. Respecto a la causal del numeral 11, solo el tenedor lo puede llenar y la demandante dice que abusaron, pero la buena fe se presume y en las pruebas no reposa que la señora Lina haya actuado contrario a la ley. La letra fue entregada voluntariamente a sus acreedores y tanto ella como el señor Jaramillo, han tenido negocios con la madre del demandado y que fue como consecuencia de dineros adeudados por ésta que Germán Salcedo Ospina giró la letra de cambio a otros acreedores de su señora madre, recogió todas las obligaciones, su madre le dijo cómo llenar la letra de cambio y le indicó el capital de lo adeudado, 405 millones que fue por lo que demandó inicialmente; no hay prueba de que esa presunción de buena fe haya sido derribada o demostrada. Es tenedora de buena fe y está legitimada en la causa. Respecto a la causal del numeral 12, las actuaciones de los particulares*

deberán ceñirse a los postulados de buena fe y lo contrario debe probarse. En el debate probatorio no surge que la señora Lina haya actuado de mala fe. El demandado fue quien de su puño y letra diligenció la letra y puede que haya cometido alguna impropiedad, pero se creó para garantizar una obligación de 405 millones; el título no estaba perdido, no se hurtó, ni se abusó de la confianza en la entrega; es al portador, circula con la entrega, artículo 668 inciso segundo y convierte al demandante en tenedor de buena fe, legitimado en la causa. Actuó tan de buena fe que incluso pese a que el mandamiento de pago se libró por la suma de la letra, bajo juramento ha reconocido un pago parcial en \$220.000 millones. Así mismo la excepción de abuso de confianza carece de demostración y no fue la demandante quien elaboró la demanda y cuando fue interrogada reconoció el pago. Según los interrogatorios y la prueba, el demandado no recibió suma de la hoy demandante, esa letra de cambio fue creado por Ospina para recoger las obligaciones de su señora madre y con esta había que cubrir la suma de capital y a pesar de que había una garantía, no era suficiente que respaldara la deuda. Por lo tanto, decidió: declarar no probadas las excepciones propuestas, excepto la contemplada en el numeral 13, en forma parcial, por haberse presentado un pago parcial en cuantía de \$220.000.000, ordenó seguir adelante la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago, ordenó a las partes presentar la liquidación del crédito, tener en cuenta el abono y condenó en costas a la parte ejecutada.

III. LA IMPUGNACIÓN

5. Inconforme con la decisión, la parte demandada formuló apelación presentando los reparos en forma oportuna y sustentando en la oportunidad concedida en esta instancia. **1***. *Para efectos de la sustentación aduce que se ratifica en los hechos y pruebas presentados en el escrito de contestación de la demanda y excepciones de mérito propuestas contra la acción cambiaria e insiste en los actos de mala fe* ejecutados por la señora Lina Marcela Hernández Betancourt, en tanto pretende la suma de \$405.000.000.00, valor sobre el cual efectivamente se libró el mandamiento ejecutivo y por el cual se ordenaron las medidas cautelares, causándole perjuicios a sabiendas que ya se le había hecho a su esposo José Carlos Hoyos Jaramillo, un pago a la obligación el 23 de enero de 2019 con el inmueble identificado con folio 017-24352, ubicado en la PARCELACION PORTÓN DE LAS FLORES LOTE 20, Loma del Escobero. La demandante mintió al ocultar el pago a través de la entrega de un inmueble a su esposo y solo fue reconocido en el interrogatorio. **1.2.** *Discrepa*

del argumento del juez para la negativa de las excepciones interpuestas cuando manifiesta que "no existe mala fe en la demandante quien reconoció el pago que se le hizo a su esposo en su interrogatorio de parte", desconociendo con este argumento que la confesión de la misma se produjo gracias a una prueba solicitada por el demandado y no por un acto voluntario de su parte, pues en el expediente no consta escrito de reforma a la demanda posterior a la contestación de la misma; de hecho su apoderado donde descorre el traslados de las excepciones insiste en el cobro de la suma de \$405.000.000.00. Considera que una confesión obtenida en medio de una prueba no es un acto de buena voluntad con el demandado, máxime cuando el pago fue desconocido en la demanda y ocultado por más de dos años y así dan cuenta de ellos los hechos y pretensiones de la demanda, la confesión de la demandante y las pruebas documentales aportadas al proceso. **2***. Considera que no es justa ni imparcial la valoración dada a los testimonios practicados, toda vez que el juez da TOTAL credibilidad a las declaraciones de la demandante Lina Marcela Hernández Betancourt, pese a que la parte demandada logró demostrar que había mentido en cuanto a la cuantía de las pretensiones de la demanda, al recibo del pago a la obligación demandada hecho por la señora Luz Andrea Ospina, madre del demandado, a su esposo José Carlos Hoyos Jaramillo; ocultó al proceso la relación que existía entre su esposo, el demandado Germán Salcedo Ospina y su madre la señora Luz Andrea Ospina. Toda esta relación fue descubierta por el demandado y probada mediante pruebas documentales, realidad que no pudo ocultar más la demandante. Por otro lado, es contradictorio mirar que el Juez de primera instancia, justifica el proceder arbitrario de la demandante y atribuye valor a su dicho de que ella giró el dinero adeudado a la cuenta de ahorros de su madre Luz Andrea Ospina Múnera, sin mediar ninguna prueba de lo dicho, a lo que dio credibilidad total y así justificar el hecho de que estaba legitimada para el cobro del importe del título valor con espacios en blanco incompleto y que dicho sea de paso recibió a nombre de su esposo. Pero a la hora de valorar el testimonio de la señora Luz Andrea Ospina Múnera le resultó ser sospechoso por ser la madre del demandado, poco creíble, pese a que las pruebas aportadas en el proceso corroboraron toda la historia planteada alrededor del negocio jurídico subyacente que dio origen al título ejecutivo que se cobra en el presente proceso. **3***. El Juez de primera instancia no apreció la declaración de la señora Luz Andrea Ospina Múnera cuando manifestó que no había recibido en su cuenta dineros girados por la demandante, que sus negocios siempre fueron con el señor José Carlos Hoyos Jaramillo, como tampoco tuvo en cuenta el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-1043316, donde consta una hipoteca abierta sin límite de cuantía del BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA por la compra hecha a los señores LINA

MARCELA HERNÁNDEZ BETANCOURT y JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO, el banco les desembolsó directamente a ellos a través del crédito hipotecario el valor del apartamento que se les compró, esta prueba se aportó con el fin de probar la relación existente entre el señor José Carlos Hoyos Jaramillo esposo de la demandante, el demandado y su madre, mostrar que esa relación era muy anterior a la creación del título ejecutivo materia de este proceso, relación que no se puso de presente en la demanda ni por la demandada ni por su abogado, quien en el escrito de contestación de las excepciones de mérito dijo que en la demanda consignó la información dada por su cliente y en la audiencia inicial y en la de instrucción y juzgamiento el juez manifestó que la "demandante no hizo la demanda sino el abogado". El testimonio de la señora Luz Andrea Ospina Múnera no fue tachado como sospechoso en la audiencia de recepción de este. **4***. En cuanto al testimonio del señor **León Darío Upegui**, el señor Juez restó credibilidad, cuando éste fue muy claro en la relación de familiaridad que existía entre la demandante y su esposo José Carlos Hoyos Jaramillo, es su cuñado y a su vez amigo de la señora Luz Andrea Ospina Múnera, quien fue claro en que él presentó al esposo de la demandante, que supo que este recibió el lote de la Loma el Escobero y que sabe porque el mismo señor José C. Hoyos Jaramillo le contó que había comercializado el lote que la señora Ospina Múnera le había entregado en pago en \$400.000.000.00. **5***. No se valoró en su integralidad el certificado de tradición No. 017-24352 correspondiente al inmueble entregado en pago de la obligación que se ejecuta, ignorando el valor de adquisición del mismo por parte de la madre del demandado Luz Andrea Ospina Múnera, anotación No. 041, en la cual consta que el inmueble fue adquirido por la suma de \$314.300.000.00. Solicita se analice dicho certificado de libertad y tradición. En la contestación de la demanda y excepciones se trató de probar y así se hizo, la relación existente entre el demandado, su madre y el señor José Carlos Hoyos Jaramillo. Se alegó y se probó el pago. Se probaron los argumentos de la contestación de la demanda sin contradicción alguna, luego entonces no se entiende cómo en primera instancia el señor juez da poca credibilidad a lo planteado por el demandado y además lo condena en costas. **6*.-**. No está de acuerdo con la condena en costas en contra del demandado e inclusión en las mismas por la suma de \$5.000.000.00 a título de agencias en derecho en favor de la demandante, porque considera que debió ser en doble vía y no de una sola, toda vez que si bien prosperaron parcialmente las excepciones de mérito en favor del demandado, este también debió contratar a un profesional para defenderse; también es cierto que hubo prosperidad parcial de la demanda en favor de la parte demandante, no prosperaron sus argumentos y al respecto de ello es claro el inciso 5º del artículo 365 del CGP. Solicita revocar la sentencia en lo que sea desfavorable.

En el término concedido a la parte demandante para alegar de conclusión, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

6. Al no advertirse ningún vicio que pueda invalidar lo actuado y al estar cabalmente satisfechos los presupuestos procesales, se procede a penetrar en el mérito del asunto. Conforme a la competencia restringida del superior en sede de apelación, prevista en el artículo 328 del CGP, habida cuenta que el recurso de apelación fue formulado únicamente por la parte demandada, está limitada la competencia al estudio de los temas que fueron propuestos por el recurrente al sustentar el recurso de apelación.

7. PROBLEMA JURÍDICO. Se concreta en determinar si asistió razón al A quo al declarar imprósperas las excepciones formuladas, ordenando seguir adelante con la ejecución en la forma planteada, o por el contrario, faltó análisis al contenido de las excepciones, para determinar que la demandante actuó de mala fe al desconocer en la demanda un pago que se había realizado a su esposo, que faltó valoración al interrogatorio de la demandante y las declaraciones de los señores LUZ ANDREA OSPINA MÚNERA y LEÓN DARÍO UPEGUI, faltó valoración de la prueba documental y si era procedente la condena en costas solamente en contra del demandado y el valor de las agencias señaladas.

8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del C.G.P, por vía ejecutiva se pueden demandar las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. Ahora bien, según el contenido de los artículos 164 y 167 ibídem, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso e incumbe a las partes probar el supuesto de

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Cuando se trata de procesos de ejecución, se parte de la base de la certeza de la obligación que se pretende hacer efectiva; es así como la parte demandante, tenedora del documento en que conste la misma, queda exonerada de la carga probatoria que le imponen las normas en mención, le basta allegar el título para que sus pretensiones se vean establecidas. En cambio, el accionado debe proponer y probar los hechos fundamento de las excepciones tendientes a enervar la acción.

El suscriptor de un título valor queda obligado conforme al tenor literal del mismo, reza, en lo pertinente, el artículo 626 del Código de Comercio, precepto que determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el documento, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos allí consignados y hacer valer la garantía que a modo de unión ostenta el escrito. Es que, como lo ha dicho la doctrina, la literalidad *"... delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Es decir, que de la expresión literal se deriva el alcance del derecho y de la obligación consignados, de tal manera que las partes originarias o futuras que intervengan en la relación cambiaria, ya sea para adquirir o transferir el título saben a qué atenerse, conocen perfectamente el derecho o la obligación a que se someten, pues la literalidad da certeza y seguridad en sus transacciones..."*¹.

9. Ahora bien, el ejercicio del derecho incorporado en el título es autónomo, esto es, se independiza del negocio que le subyace, de tal manera que el tenedor legítimo no está ligado a las circunstancias que dieron origen a la emisión. Con esta figura cada tenedor, ha dicho la doctrina, *"... adquiere un derecho que empieza en él. La autonomía se caracteriza por la incomunicabilidad de vicios, en tanto que al tenedor legítimo no se transmiten los defectos que pudieron haberse creado con las relaciones anteriores, por ejemplo, en lo que hace referencia al negocio causal que dio origen al documento y como esos vicios no se comunican, tampoco podrán proponerse*

¹ Peña Nossa, Lisandro y Jaime Ruiz Rueda. Curso de Títulos Valores. Biblioteca Jurídica Diké, quinta edición, 1995. Pág. 29.

excepciones al tenedor legítimo del título derivado de dicha creación, porque el título se desvinculó de las partes que le dieron nacimiento, del negocio que lo originó..."².

De lo anterior se desprende que frente a la acción cambiaria, ejercida en pos de la mentada literalidad, en tanto que el instrumento no haya sido transferido en propiedad a terceros, e incluso, en varios casos, aun cuando haya circulado, proceden las excepciones que consagra la norma 784 de la legislación mercantil, incluyendo el pago total o parcial de la obligación, pero ellas, cualquiera que se proponga, deben ser acreditadas fehacientemente para poder derrumbar la eficacia crediticia que obtienen los títulos valores con la firma estampada en ellos y la entrega con la intención de negociabilidad (art. 625 del C. de Co), más aun cuando se han satisfecho los requisitos de forma previstos en los artículos 621 y 671 de la ley sustantiva comercial, tratándose de una letra de cambio.

10. En consonancia con lo expuesto, la Sala de Casación Civil³ ha establecido que **"... el poseedor del título, amparado por la apariencia de titularidad que le proporciona la circunstancia de ser su tenedor en debida forma, está facultado, frente a la persona que se obligó a través de la suscripción, para exigirle el cumplimiento de lo debido."**^[45] Apoyada en doctrina especializada sobre el tópico, la misma corporación consideró que *"la legitimación es la situación en que, con un grado mayor o menor de fuerza el derecho objetivo atribuye a una persona, con cierta verosimilitud, el trato de acreedor y ello no sólo a efectos de prueba, sino de efectiva realización del derecho. La legitimación consiste, pues, en la posibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico del derecho conforme a las normas del derecho común; equivale, por consiguiente, a un abandono de cualquier investigación que pudiera realizarse sobre la pertenencia del derecho."*^[46]

*...A su vez, estas consideraciones resultan armónicas con lo preceptuado por el artículo 627 del Código de Comercio, el cual dispone que **"Todo suscriptor de un***

² Leal Pérez, Hildebrando. Títulos Valores. Editorial Leyer, sexta edición, 2001. Pág. 71.

³ SENTENCIA T-310/09

título valor se obligará autónomamente... Por ende, los títulos valores, revestidos de las condiciones de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, constituyen títulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contienen obligaciones cartulares, que en sí mismas consideradas **conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de crédito** y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo. Bajo esta lógica el artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra, si a ello hubiera lugar. ...". (resaltos fuera del texto).

11. Descendiendo al caso concreto, fue allegada al plenario 1 letra de cambio, con fecha de creación 9 de octubre de 2018 persiguiendo un cobro en cuantía de \$405.000.000, título que inicialmente tuvo reparos en cuanto a algunos requisitos, pero que, en sede de segunda instancia, esta sala consideró que era un título apto, con el cual se libró mandamiento de pago en la forma solicitada y en el término del traslado, el demandado propuso varias excepciones tendientes a enervar la acción.

La sentencia que desató la Litis desestimó las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante la ejecución y tener en cuenta un abono que se admitió en el interrogatorio. La parte demandada impugna la decisión y en su escrito, si bien es cierto afirma que se ratifica en los argumentos expuestos al proponer excepciones, también lo es que según se establece en la normatividad aplicable al caso, el recurso de apelación tiene como objeto que el superior examine, únicamente los reparos concretos formulados por el apelante; es por ello que se atenderán los argumentos que en dicha oportunidad se han expuesto incluidos un pago de la obligación.

12. Lo primero a analizar es el tema relacionado con los actos de mala fe que se le endilgan a la demandante, en tanto pretendió la

suma de \$405.000.000, desconociendo el pago a la obligación con fecha 23 de enero de 2019 con la transferencia del inmueble identificado con el folio de matrícula 017-24352 en cabeza del señor JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO y la valoración de las pruebas que esgrimió el A quo para desconocerlo.

13. Analizando el material probatorio allegado quedó establecido que, entre la demandante LINA HERNÁNDEZ BETANCOURT, su esposo el señor JOSÉ CARLOS JARAMILLO y la madre del aquí demandado ANDREA OSPINA, existieron negocios, pues así fue admitido por las partes; de hecho al ser preguntados sobre el origen de la deuda que se cobra en este proceso, la señora **LINA HERNÁNDEZ BETANCOURT** dijo: *"Esa obligación nació cuando nosotros CARLOS JOSÉ mi esposo y yo le vendimos un apartamento que teníamos a ANDREA que era arrendataria, en mayo de 2017, derivado de esa venta sabíamos que ella se dedicaba a la compra de remates y de inmuebles. José Carlos mi esposo era el que tenía trato con ella y en una conversación la señora nos pidió que le prestáramos dinero y a cambio de eso recibíamos intereses. Nosotros le prestamos, ella nos pagaba intereses. Como era una suma tan grande y habíamos dado toda la plata del apartamento y nos dio miedo, empezó ese desespero de parte mía y le dije a Carlos no tenemos ningún documento. De tanta insistencia surgió una hipoteca que la señora le dio a Carlos sobre un lote como para garantizar el dinero que le habíamos dado"*. Y el señor **GERMÁN SALCEDO OSPINA** indicó: *"Mi mamá tenía negocios con José Carlos Hoyos; había un lote de las Flores que se le había hecho una hipoteca a favor de José Carlos Hoyos para garantizar una deuda y por motivos de familia, el lote quedó a mi nombre, pero aun así conservaba la garantía a favor de José Carlos; ellos al darse cuenta empezaron a demandar de mi nombre una letra, o sea José Carlos y Lina, exigieron una letra por ser yo el titular del lote"*. De los dichos de éste último, también se desprende que no estaba muy enterado de las negociaciones de su madre, pero admitió que era algo relativo a la compra y venta de remates judiciales y que la deuda que garantizaba la hipoteca fue *"la que se recogió en la letra que eran 405 millones... que en un principio le prestaran plata a mi mamá Luz Andrea Ospina"* y a pesar de afirmar que no ha tenido negocios con la demandante ni

con su esposo fue preguntado por qué entonces firmó la letra y respondió: ***"porque la deuda que tenía mi mamá con José Carlos estaba garantizada con ese inmueble, ese lote que a pesar que estaba hipotecado a favor de José Carlos Hoyos, no estaban satisfechos con ello y presionaron para que yo que era el dueño firmara la letra justificando esa deuda..."***.

14. En el interrogatorio de parte que absolvió la demandante indicó que ***"en octubre de 2018... seguimos conversando y pidiendo la plata y para enero de 2019 José Carlos viajó a Colombia y con Luz Andrea Ospina se pusieron de acuerdo en el valor del lote que son 220 millones ese fue el valor acordado y que se firmó... todavía nos debe dinero... después del 2019 ya no hubo más comunicación...yo busqué asesoría porque todavía nos debe. De ahí viene el valor de 405 millones. Los 220 millones fue un pago parcial..."***. Esta es la afirmación que la recurrente tilda como de mala fe, indicando además que ya se le había hecho a su esposo José Carlos Hoyos Jaramillo, un pago a la obligación el 23 de enero de 2019, con el inmueble identificado con folio 017-24352, ubicado en la PARCELACIÓN PORTÓN DE LAS FLORES LOTE 20, Loma del Escobero y aun así cobra los \$405.000.000.

El certificado citado, reposa en el expediente y da cuenta en la **anotación 41** que el **16 de noviembre de 2017**, es adquirido por adjudicación en remate por la señora LUZ ANDREA OSPINA MÚNERA; en la siguiente anotación, el día 27 de febrero de 2018 aparece un gravamen hipotecario en favor de JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO (no se indica cuantía). En la **anotación 43** con fecha 20 de abril de 2018 la señora OSPINA MÚNERA transfiere el dominio en favor del señor GERMÁN SALCEDO OSPINA en la suma de \$163.821.000. En la **anotación 44**, con fecha 7 de mayo de 2019 el señor SALCEDO OSPINA transfiere el dominio en favor de JOSÉ CARLOS HOYOS JARAMILLO en la suma de \$220.000.000. En la **anotación 46**, se cancela el gravamen hipotecario al que se hizo referencia en cuantía de \$70.000.000. Finalmente, la **anotación 47**

de cuenta de una venta del señor HOYOS JARAMILLO con fecha 5 de febrero de 2020 en cabeza de los señores VÍCTOR OSORIO Y KARLA TORRES en la suma de \$250.000.000.

15. Lo primero que habría que dejar establecido es que la suma inicial con la cual se presentó la demanda, no admitió objeciones por el demandado en el interrogatorio; es más, a dicha suma concreta hizo alusión como también lo hizo la señora ANDREA OSPINA, madre de éste, quien refirió que la deuda eran 405 millones y si bien es cierto, negó que la demandante le hubiese realizado una consignación por 350 millones, admitió que recibía dinero a interés del señor JOSÉ CARLOS, inicialmente con 10.000 dólares el cual canceló y *"Ya después con otro capital empezamos con interés del 3% y le dije así no puedo trabajar, me bajó al 2 y medio, le pagué algunos meses y después... el campo inmobiliario falló... nadie volvió a comprar..."* y ahí empezó el incumplimiento. No puede entonces afirmarse válidamente que existe mala fe por el hecho de haber pretendido el cobro de la suma citada, indicando que en el interrogatorio se confesó un pago parcial por una prueba solicitada por el demandado y no por acto de parte voluntario: **En primer lugar**, porque según la conceptualización que del instituto en mención ha realizado la Alta Corporación⁴: La confesión, medio de prueba y acto de voluntad⁶, *"consiste en la manifestación que hace una parte sobre hechos que pueden producirle consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan a la parte contraria"*²; *confesar, pues, es "reconocer como verdadero un hecho o un acto de índole suficiente para producir contra el que lo admite consecuencias jurídicas"*⁸, *certeza que puede predicarse tanto de los hechos trasuntados como fundamento de la demanda o como basamento de las excepciones propuestas*⁹;". La demandante hizo un relato de la conversación que sostuvo con la señora ANDREA solicitando la devolución del dinero que le habían prestado y de la forma como el

⁴ STC21575-2017.Radicación n.º 05000-22-13-000-2017-00242-01. M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.

señor JOSÉ CARLOS y ella se habían puesto de acuerdo en el valor del lote que iba a servir de garantía en 220 millones, indicando además que todavía les quedaba debiendo y que después de esa conversación no tuvieron más comunicación; además, nótese que la señora ANDREA a pesar de que ya había hipotecado el bien, que como abogada que es, sabía que dicha garantía respaldaba la obligación y aun así aceptó voluntariamente entregar una letra y más grave aún que llama la atención de la Sala, que al momento de transferir el dominio al señor Carlos, demuestra preocupación porque *los intereses le van a seguir contando* y según han indicado, el lote tenía un valor muy superior al que se indicó y como si fuera poco, no hizo las gestiones necesarias para recobrar la letra, no denunció, no solicitó paz y salvo en la notaría. **En segundo lugar**, porque tal y como lo indicó el A quo, la demanda es presentada por abogado con fundamento en el título que es aportado, en una cuantía que la misma señora ANDREA y el demandado admitieron que era el valor adeudado; la parte demandante tiene la carga de presentar con la demanda un título idóneo y el que nos ocupa, no ha merecido reparos en la sustentación y en todo caso es a la parte demandada a quien corresponde acreditar la existencia de su extinción mediante el pago o los abonos que realiza. **En tercer lugar**, es cierto que la parte demandada solicitó la prueba para el interrogatorio, pero también debe tenerse en cuenta que según se ha indicado en la misma providencia que se referenció, *"por virtud del principio de comunidad de las pruebas, una vez practicadas, pertenecen al proceso y no a quien las solicitó; por ende, si le sirven a todas las partes que en él intervienen, aparece como lógico y natural señalar que su apreciación no se pueda cumplir de manera aislada, sino realizarse a partir de la comparación recíproca de los distintos medios"*. Y en todo caso es al juez a quien corresponde analizar los alcances de los dichos de las partes. **Y finalmente**, porque no es cierto que se hubiese hecho un pago a la obligación con el inmueble 017-24352, porque se admite que la deuda son 405 millones y la venta fue por un valor inferior.

16. Otro de los reparos del demandado, hace relación a la valoración que se hizo al interrogatorio de la demandante considerando que mintió frente a la cuantía de las pretensiones, en el pago de la obligación y en la relación que existía entre su esposo, el demandado y la madre de éste, para lo cual es necesario corroborar dichas afirmaciones con las que hicieron el demandado y su señora madre ANDREA, incluso el certificado de libertad y tradición nro. 001-1043316 que corresponde al inmueble ubicado en BALCONES DE TIERRA LINDA, que en sentir del recurrente, el A quo no valoró y se aportó con el fin de probar la relación existente entre el señor José Carlos Hoyos Jaramillo esposo de la demandante, el demandado y su madre, mostrar que esa relación era muy anterior a la creación del título ejecutivo materia de este proceso, ante lo cual se advierte, que no tiene ninguna trascendencia lo que dicho certificado muestra, en tanto aparece una anotación donde la demandante y su esposo JOSÉ CARLOS HOYOS venden el día 8 de junio de 2017 a la señora LUZ ANDREA OSPINA MÚNERA el citado inmueble y ésta lo hipoteca a BANCO COLPATRIA, situación que no se desconoce, en tanto la demandante lo informó en el interrogatorio cuando indicó el origen del negocio y el demandado también advirtió que su señora madre tenía negocios con el señor JOSÉ CARLOS; las actividades comerciales que se resaltaron no son objeto del debate, siendo claro entonces que según indico la señora LINA, de dicha venta surge el dinero que fue prestado a la madre del demandado y aunque ésta desconoce la transferencia que en cuantía de 350 millones se le hizo, sí admitió que recibió dinero, la deuda en sí nunca ha sido negada, y que fue con el señor CARLOS con quien realizó los negocios y le hizo hipoteca a su nombre, incluso dio instrucciones a su hijo hoy demandado, para que elaborara la letra también a nombre de éste, solo que nunca lo había hecho y colocó como girado al señor JOSÉ CARLOS y como girador colocó al demandado y sin fecha de vencimiento, situaciones que ya consideró en su oportunidad esta Sala deduciendo que el título era apto para ser ejecutado.

17. Por ello no puede afirmarse válidamente que el juez justificó la legitimidad de la demandante admitiendo que giró el dinero a la señora ANDREA OSPINA cuando ella lo negó, porque ya se indicó que ésta admitió la deuda y como la letra allegada contiene una orden de pago en favor de un beneficiario que puede ser el girador o creador y que además fue aceptada, que implica que la persona reconoce la deuda y se obliga, porque el aceptante de la letra se convierte en el principal obligado. Se puede concluir que la firma y aceptación de la letra de cambio implica que el aceptante reconoce y acepta la obligación, lo que permite cumplir con uno de los requisitos de todo título ejecutivo: que provenga del deudor. Tampoco ofrece ninguna duda el hecho de que sea la señora LINA quien haya presentado la letra para el cobro, porque se tiene que obedeciendo a la ley de circulación de los títulos valores, los mismos pueden circular al portador, a la orden o en forma nominativa. En el primer caso, se trata de títulos valores que no se expiden a favor de persona determinada y el tenedor se legitima con la simple exhibición del título, a más que la tradición se efectúa con la simple entrega del documento (Artículo 668 del Código de Comercio). En el segundo evento, se trata de títulos valores expedidos a favor de persona determinada y para su transmisión, además de la entrega del título, se requiere el endoso (Artículo 651 del Código de Comercio). Finalmente, en el caso de los títulos valores que circulan en forma nominativa se exige la inscripción del tenedor en el registro que para el efecto lleva el creador del título (artículo 648 del Código de Comercio) y porque también quedó claro que fue entregada voluntariamente por la madre del demandado a quien autorizó expresamente que la llenara con el capital que ella adeudada, no medió fuerza en ello y fue una garantía para respaldar las obligaciones que había asumido aquella, convirtiéndose en tenedora de buena fe que no fue desvirtuada, máxime porque a pesar de que en la contestación de la demanda se adujo que el señor CARLOS JOSÉ había amenazado a la señora ANDREA, " *que me mandaba los de*

la moto”, que “era una ladrona”, finalmente de ello no hay prueba en el expediente y no hay necesidad de analizar los dichos de los testigos en ese sentido porque en el escrito de impugnación no se hizo referencia a ello.

18. Se queja también la recurrente, de que se restó credibilidad al testimonio del señor **LEÓN DARÍO UPEGUI**, pero si se analiza sus versiones no aportan mucho, en tanto dejó claro que fue la persona que presentó a CARLOS HOYOS y ANDREA, sabe que hicieron negocios, que Carlos “le vendió un apartamento y dejó la plata trabajando en esas propiedades y después dijo que tenía que respaldar la plata con algo y ella le hipotecó un lote en el Escobero y hasta ahí sé”; no supo que cantidad de dinero entregó el señor Carlos; ni de la letra; dijo que entre JOSÉ CARLOS y ANDREA tuvieron inconvenientes por problemas de dinero, pero solo indicó “ellos tenían problemas, por ese dinero, unos intereses que yo escuché lo que me dijo Carlos, no me quiere reconocer intereses, lo que escuché, fue que cuando Carlos dijo necesito respaldo Andrea entregó el lote pero no sé qué cantidad de plata”, según el recurrente, con este testigo se da cuenta que el señor CARLOS recibió el lote de la loma el Escobero (y de ello da cuenta el certificado de libertad allegado) y le contó que “había comercializado el lote que la señora Ospina Múnera le había entregado en pago en \$400.000.000.00.”, pero según indicó “lo único que sé es que mi cuñado me dijo hace dos años que había vendido en 400 millones... no sé si es cierto o mentiras... cuando un cliente me dijo que daba 600 millones ya se había vendido...”.

19. Otro motivo de inconformidad tiene que ver con la falta de valoración del certificado de libertad del inmueble con matrícula 017-24352 que es entregado como pago de la obligación, **porque se ignoró su valor de adquisición, solicitado simplemente que se analice**, para lo cual se le indica que si lo que pretende es comparar valores, es claro que el precio en que el bien fue adquirido en remate ascendió a **\$314.300.000**, luego fue hipotecado en \$70.000.000, lo transfirió en dominio al demandado en la suma de **\$163.821.000**

y luego lo vendió al señor JOSÉ CARLOS en **\$220.000.000**, ello demuestra la autonomía que tenía la señora ANDREA para disponer del bien que era de su propiedad, máxime que en el testimonio que rindió indicó que el inmueble valía mucho más, pero no hay prueba que demuestre su valor real. Finalmente, el inmueble es vendido a terceros en la suma de **\$250.000.000**, suma no muy alejada del valor en el cual fue entregado como parte de pago de la obligación. Es más, aunque se ha insistido en que la parte demandada probó el pago, ello no ocurrió; con la transferencia del inmueble se establece una cuantía cierta \$220.000.000 porque de ello da cuenta el folio de matrícula inmobiliaria y los dichos de la demandante, de hecho el A quo ordenó tener en cuenta el valor como abono, pero en el expediente no hay prueba que demuestre algo diferente, porque la misma señora ANDREA afirma que pagó con el lote y nada refiere del porqué el valor que allí se anotó, que claramente no alcanza a cubrir el valor total de lo que se admitió se adeuda.

20. Y finalmente, se queja de la condena en costas que se debió dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 365 y del valor de las agencias en derecho. Para ello se advierte que se incluyen dos temas que se tratan en diferentes momentos. Lo relacionado con la condena como tal, lo establece el artículo 365 del CGP que preceptúa en su numeral 1º. ***"Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.... que haya propuesto..."*** y el inciso 5º. ***"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"***. La condena se dio en contra de la demandada en tanto fue la vencida en el proceso; las pretensiones de la demanda prosperaron, de hecho, se ordenó seguir adelante la ejecución por la suma que fue solicitada y la suma que se ordenó tener en cuenta fue un abono que en su momento será aplicado, por ello la condena en ese sentido no merece reparos. Y en cuanto al valor de las agencias en derecho que

considera altas, es un tema que debe ser tramitado conforme lo estipula el artículo 366 en el numeral 5 mediante recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. Así mismo, dando aplicación al numeral 8 de la norma citada, no habrá condena en costas en esta instancia.

21. Así las cosas, quedó claro que la letra de cambio fue creado por el demandado recogiendo las obligaciones que tenía su señora madre, se aceptó la obligación y no se demostró su extinción en cuanto la garantía inicial que se ofreció no cubrió el total de la obligación, por ello era viable continuar adelante la ejecución y como así lo dijo el A quo, la sentencia de primera instancia será confirmada.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida el 15 de junio de 2021 por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín dentro del proceso Ejecutivo instaurado por LINA MARCELA HERNÁNDEZ BETANCOURT en contra de GERMÁN SALCEDO OSPINA.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. No se causaron.

TERCERO: Ejecutoriada la sentencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CUARTO: Lo aquí decidido se notifica a las partes en estrados.



NOTIFÍQUESE

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín